



SIMPLE Y CLARO



POR ELLIOT
VELHER

El último paso hacia la dictadura

El sometimiento del Poder Judicial al régimen autoritario de Morena ya no es una hipótesis, es un hecho consumado.

La votación de los integrantes —que visten el color guinda para buscar privilegios— del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para perseguir penalmente a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial es la prueba más clara de que el gobierno no solo busca controlar la justicia, sino castigar a quienes se atreven a ejercerla con independencia.

Hoy, los jueces son el objetivo. Mañana, cualquier ciudadano que desafíe al poder puede serlo. Cuando un juez concede una suspensión, lo hace porque la ley le da esa facultad.

No es un acto de rebeldía ni de oposición política, es simplemente el ejercicio de sus funciones dentro del marco constitucional.

Pero en el México de la transformación, impartir justicia se ha convertido en un delito.

El CJF, lejos de ser un garante de la independencia judicial, ha demostrado que es un sicario más del poder.

En lugar de proteger a los jueces de presiones políticas, ha decidido sumarse a la persecución.

Con esta decisión, los jueces que han otorgado suspensiones contra la reforma judicial enfrentan ahora el riesgo de ser investigados, procesados y condenados solo por aplicar la ley.

La señal es clara: ningún juez está a salvo si su criterio no coincide con el del régimen.

Y si los jueces pueden ser perseguidos por cumplir con su deber, ¿qué espera a los ciudadanos que se atreven a cuestionar al gobierno?

El Poder Judicial es el último bastión de defensa contra los abusos del poder.

Es la instancia a la que cualquier ciudadano puede acudir cuando sus derechos son violados, cuando el Estado actúa de manera ilegal o cuando una ley injusta debe ser revisada.

Pero si el mensaje es que los jueces que no se alineen con el gobierno serán castigados; entonces la independencia judicial deja de existir.

Y sin jueces independientes, el ciudadano queda indefenso ante el Estado.

La consecuencia de esto es aterrador: si el gobierno decide expropiar una empresa, los tribunales no detendrán el abuso.

Si un periodista es encarcelado por incomodar al poder, no habrá juez que se atreva a concederle un amparo.

Si un ciudadano es víctima de una detención arbitraria, nadie podrá impedir que sufra años en prisión sin juicio.

La persecución contra los jueces no es solo un ataque al Poder Judicial.

Es un ataque contra el derecho de todos los mexicanos a una justicia imparcial.

Hoy, muchos ven esta decisión del CJF

como un asunto interno del Poder Judicial, como un conflicto de jueces contra jueces.

Pero no lo es. Es el síntoma de algo más grave: la normalización de la persecución política.

Si hoy aceptamos que un juez sea procesado por sus resoluciones, mañana aceptaremos que cualquier opositor, periodista o ciudadano que incomode al régimen también lo sea.

Lo que comienza como una ofensiva contra la independencia judicial puede convertirse en la excusa perfecta para criminalizar la disidencia en cualquier nivel.

Los gobiernos autoritarios no nacen de un día para otro. Se construyen paso a paso, atacando primero a los que tienen el poder de detenerlos.

En México, ese paso ya se dio: el gobierno ha logrado convertir a los jueces en ene-

migos del Estado, y ahora busca castigarlos por el simple hecho de hacer su trabajo.

Lo siguiente será más evidente: la persecución de voces críticas, el encarcelamiento de opositores y la desaparición de cualquier espacio donde se pueda cuestionar al poder sin consecuencias.

La persecución contra los jueces es la prueba final de que la justicia en México ha dejado de ser un contrapeso y se ha convertido en rehén del poder.

Un país donde los jueces no pueden actuar con independencia es un país sin justicia.

Y un país sin justicia es un país donde el ciudadano está a merced de la voluntad del gobierno. Los jueces perseguidos hoy son solo el principio. Si permitimos que esto ocurra sin levantar la voz, si aceptamos que la justicia puede ser utilizada como un arma política, entonces no habrá vuelta atrás.

Porque cuando la ley deja de proteger a quienes la aplican, deja de protegernos a todos.

La persecución contra los jueces no es solo un ataque al Poder Judicial. Es un ataque contra el derecho de todos los mexicanos a una justicia imparcial. Hoy, muchos ven esta decisión del CJF como un asunto interno del Poder Judicial, como un conflicto de jueces contra jueces. Pero no lo es. Es el síntoma de algo más grave: la normalización de la persecución política



Foto: Cuartoscuro